



**VNiVERSIDAD  
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

## **TRABAJO FIN DE GRADO**

### **GRADO EN DERECHO**

**Derecho Privado**

**Derecho Civil**

**Curso 2019/2020**

# **RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE UNA INTROMISIÓN ILEGÍTIMA EN EL DERECHO AL HONOR**

**Especial referencia al honor de las  
personas jurídicas**

**Álvaro López González**

**Tutor: Eugenio Llamas Pombo**

**Junio**

**2020**

**TRABAJO FIN DE GRADO**

**GRADO EN DERECHO**

**Derecho Privado**

**Derecho Civil**

**RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA  
DE UNA INTROMISIÓN ILEGÍTIMA EN  
EL DERECHO AL HONOR:**

**Especial referencia al honor de las personas  
jurídicas**

**PUBLIC LIABILITY DERIVED FROM  
AN ILLEGITIMATE INTERFERENCE  
IN THE RIGHT TO HONOUR:**

**Special reference to the legal persons honour**

**Álvaro López González  
alvarogonzalez980@gmail.com**

**Tutor: Eugenio Llamas Pombo**

## **RESUMEN**

En el presente trabajo nos vamos a centrar en analizar cómo se protege civilmente el derecho al honor de las personas, haciendo una especial referencia al honor de las personas jurídicas. En primer lugar, se explican aspectos generales del derecho fundamental al honor, así como quién puede ser titular del mismo. En segundo lugar, nos centraremos en analizar la responsabilidad civil derivada de las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, haciendo un especial énfasis en el análisis de la Ley Orgánica 1/1982, y en la reparación de los diferentes tipos de daños que pueden producir las vulneraciones en el honor de una persona. Posteriormente trataremos los aspectos procesales, tales como la legitimación y la posibilidad de ejercitar el derecho de rectificación. Por último, trataremos temas ampliamente discutidos por doctrina y jurisprudencia, así como el conflicto que existe entre el derecho al honor y las libertades de expresión e información, y terminando por analizar los problemas que suscitan las intromisiones ilegítimas en el honor de las personas llevadas a cabo a través de Internet.

**PALABRAS CLAVE:** Derecho al honor, responsabilidad civil, intromisiones ilegítimas, personas jurídicas, libertad de expresión e información, daño moral.

## **ABSTRACT**

In this dissertation we are going to focus on analysing how the right to honour is protected by public liability, making special reference to the legal persons honour. At first, we explain general aspects of the fundamental right to honour, as well as who can be the holder of it. Secondly, we will focus on analysing the public liability derived from illegitimate interferences in the right to honour, with special emphasis on the analysis of Organic Law 1/1982, and the repair of the different types of damages that may be produced violations in the person honour. Later we will address procedural aspects, such as legitimization and the possibility of exercising the right of rectification. Finally, we will address topics discussed by doctrine and jurisprudence, as well as the conflict that exists between the right to honour and the freedoms of expression and information, and ending we analyse the problems caused by illegitimates interferences in the honour carried out the conduct through the Internet.

**KEYWORDS:** Right to honour, public liability, illegitimate interferences, legal persons, freedom of expression and information, moral damage.

## **ÍNDICE**

INTRODUCCIÓN.....	7
1. DERECHO AL HONOR: ASPECTOS GENERALES.....	9
1.1. El derecho al honor en la Constitución Española.....	9
1.2. Marco legal.....	10
1.3. El derecho al honor de las personas jurídicas.....	10
1.3.1. Personas jurídicas de Derecho público.....	11
1.3.2. Personas jurídicas de Derecho privado.....	14
2. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE INTROMISIONES ILEGÍTIMAS EN EL DERECHO AL HONOR.....	17
2.1. La responsabilidad civil. Aspectos generales.....	17
2.2. Regulación: Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.....	19
2.2.1. Intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del derecho al honor.....	19
2.2.2. Reparación del daño y carga de la prueba.....	20
2.3. Reparación y cuantificación del daño causado por una intromisión ilegítima en el derecho al honor.....	22
2.3.1. Daño patrimonial.....	22
2.3.2. Daño moral.....	23
2.3.3. Daño moral y personas jurídicas.....	24
2.4. Diferencias con el régimen general de responsabilidad contenido en el artículo 1902 del código civil.....	26
3. INTERPOSICIÓN DE ACCIONES CIVILES.....	27
3.1. Legitimación activa.....	29
3.2. Legitimación pasiva.....	29
3.3. El derecho de rectificación: Ley Orgánica 2/1984.....	31

4. DERECHO AL HONOR Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN.....	32
4.1. Criterios de la ponderación.....	33
5. INTROMISIONES ILEGÍTIMAS A TRAVÉS DE INTERNET.....	34
6. CONCLUSIONES.....	37
BIBLIOGRAFÍA.....	40
LEGISLACIÓN UTILIZADA.....	43
JURISPRUDENCIA.....	44



## **INTRODUCCIÓN.**

La Responsabilidad Civil se conforma como uno de los pilares básicos de nuestro ordenamiento jurídico, siendo el epicentro de los conflictos referentes a la causación de un daño. No solo en la sociedad actual toma una especial relevancia el deber de no causar daño a los demás, pues ya en el Derecho Romano Ulpiano lo consideró como una de las máximas del comportamiento humano (*alterum non laedere*), junto a vivir honestamente (*honeste vivere*) y dar a cada uno lo suyo (*suum cuique tribuere*)<sup>1</sup>.

Más concretamente, la responsabilidad civil extracontractual, o también llamada responsabilidad aquiliana, hace referencia a la obligación de reparar el daño causado mediante una acción u omisión y sin que medie ningún tipo de relación jurídica previa entre las partes. Además, para el nacimiento de dicha obligación de reparar también se requiere que la actuación del sujeto activo sea ilícita o se realice mediando culpa o negligencia, y que exista una relación de causalidad entre la conducta llevada a cabo y el daño producido.

La responsabilidad civil extracontractual cumple una función esencial en la sociedad, pues las personas, en su día a día, están expuestas a sufrir innumerables daños, los cuales deben ser reparados por su causante; o, dicho de otra forma, el culpable del daño debe resarcir a la víctima con el fin de colocarla en la misma posición en la que estaba antes de la producción del daño.

En lo referente a las funciones que cumple la responsabilidad civil, además de la esencial función de resarcimiento, una parte de la doctrina aboga por la multifuncionalidad de dicha institución, aceptando la existencia de otras funciones, tales como una función demarcatoria de los límites de lo lícito y lo ilícito, una función punitiva de reproche hacia una conducta, e incluso, una función preventiva general. Si bien se trata de diferentes puntos de vista, la función eminente y la que nos interesa es la de resarcimiento, la función de reparar el daño causado, de colocar a la víctima en la misma posición que se encontraba antes de sufrir el daño.

Una vez repasado la responsabilidad civil, nos centraremos más concretamente en el tema que nos concierne, la responsabilidad civil derivada de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de las personas, tanto físicas como jurídicas. La titularidad del

---

<sup>1</sup> JUSTINIANO, Instituta, Libro I, 1, 3.



derecho al honor de las personas jurídicas es un tema muy controvertido y ampliamente debatido por la doctrina, pues las opiniones de los autores son divergentes a la hora de reconocer dicho derecho a las personas jurídicas, así como de aceptar la posibilidad de que éstas puedan sufrir daños morales.

Lo que puede parecer a priori una mera cuestión teórica, toma una especial relevancia en la práctica, pues el reconocimiento del derecho al honor de las personas jurídicas genera ciertos beneficios en lo referente a la protección civil del mismo, sobre todo en lo que respecta a la prueba del daño y en lo referente al plazo para ejercitar las acciones, el cual es superior en el ámbito del derecho al honor.

Por ello, dentro del objeto de estudio del presente trabajo estará intentar dilucidar qué personas jurídicas gozan de la protección civil que les confiere ser titulares del derecho al honor, así como la determinación de la responsabilidad civil derivada de las intromisiones ilegítimas sufridas en el mencionado derecho fundamental. También examinaremos los supuestos en los que el derecho al honor se vea vulnerado por una intromisión ilegítima a través de Internet, pues actualmente es uno de los principales medios a través de los cuales se atenta contra los derechos fundamentales recogidos en el artículo 18.1 de nuestra Constitución.

También trataremos de exponer las cuestiones principales que rodean los tipos de daños que pueden sufrir las personas como consecuencia de ver vulnerado su derecho fundamental al honor, marcando la diferencia entre los daños patrimoniales y los daños morales. Analizaremos si las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos del daño moral, ya que en un principio se consideró que sólo las personas físicas podían sufrir tales daños.

Por último, pero no por ello menos importante, expondremos el conflicto existente entre el derecho al honor y las libertades públicas de expresión e información, ambos derechos fundamentales, analizando los criterios de ponderación que deben seguir los Tribunales para decidir que derecho debe prevalecer en cada caso.

## **1. DERECHO AL HONOR: ASPECTOS GENERALES.**

### **1.1. El derecho al honor en la Constitución Española.**

El artículo 18 de nuestra Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales, dentro de los cuales, en su apartado primero, se encuentra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La Constitución no solo menciona el derecho al honor en el apartado primero del artículo 18, sino que también aparece en su apartado cuarto como límite al uso de la informática, y como límite expreso de las libertades públicas de expresión y de información (art. 20.4 CE).

Ahora bien, ni la Constitución ni la Ley Orgánica de protección del derecho al honor han llegado a dar un concepto claro de lo que debemos entender por honor, pues se trata de un concepto jurídico indeterminado, como ya ha señalado el Tribunal Constitucional. Por esta razón los Tribunales han evitado formular definiciones meramente teóricas, para proceder en su caso, como indica PARDO FALCON, “a delimitar su contenido y alcance constitucional mediante el examen de los dos aspectos básicos que integran la problemática esencial de este derecho y que hacen referencia a los sujetos y límites del mismo”<sup>2</sup>.

Como bien señalan algunos autores como CARMONA SALGADO<sup>3</sup>, lo realmente importante no radica tanto en la necesidad de seguir buscando y sustentando nuevos conceptos de honor, los cuales nunca van a ser lo suficientemente concretos, sino en precisar lo más concretamente posible donde radican y bajo qué condiciones operan los límites a su protección jurídica en una sociedad democrática.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, en su tarea de delimitar el concepto de honor al que se refiere la Constitución española, ha distinguido entre un concepto objetivo y un concepto subjetivo de honor: Un concepto objetivo referente al resultado de la valoración que los demás hacen de nuestras cualidades (aprecio o estima), y un concepto subjetivo en lo que se refiere al resultado de la valoración que cada persona tiene de sus propias cualidades<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> PARDO FALCON, J., “Los derechos del artículo 18 de la Constitución Española en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, 1992, p. 146.

<sup>3</sup> CARMONA SALGADO, C., *Calumnias, injurias y otros atentados contra el honor*, Tirant lo Blanch, Valencia 2012, p. 28.

<sup>4</sup> VIDAL MARIN, T., “Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional”, *InDret*, 2007, p. 6.

## **1.2. Marco legal.**

El derecho al honor reconocido por la Constitución cuenta con su propia ley de protección civil, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, mediante la cual se pretende proteger civilmente los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, frente a todo género de injerencias o intromisiones ilegítimas. Dicha ley no nos proporciona una definición exacta de lo que debemos entender por el concepto de honor, sin embargo, sí que nos indica qué debemos entender por una intromisión ilegítima en el mismo, cuestión crucial que analizaremos en siguientes apartados.

A pesar de no ser objeto de análisis en el presente trabajo, no debemos olvidar la protección penal de la que goza el derecho al honor, amparado por las prescripciones contenidas en los artículos 205 a 216 del Código Penal (y artículo 456, referente a la denuncia falsa). Por ello, la exposición de motivos de la LO 1/1982, de 5 de mayo, establece que, cuando se proteja penalmente el derecho al honor, dicha protección será de preferente aplicación, por ser sin duda la de más fuerte efectividad. Igualmente, la denominada responsabilidad civil derivada del delito se deberá fijar de acuerdo con los criterios establecidos por la ley de protección civil.

Por otro lado, en los casos de sociedades con ánimo de lucro, cuando la difamación tenga por objeto intereses puramente económicos o patrimoniales que no se incluyan dentro del ámbito protegido del derecho al honor, la protección de tales intereses debe buscarse a través de la responsabilidad civil extracontractual prevista en el artículo 1902 del Código Civil o, en su caso, a través de la Ley 3/1991, de Competencia desleal y de la Ley 34/1988, General de Publicidad.

## **1.3. El derecho al honor de las personas jurídicas.**

El derecho fundamental al honor está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y protegido civilmente por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Sin embargo, en ningún texto legal se especifica si las personas jurídicas ostentan dicho derecho o, si por el contrario, solo las personas físicas pueden ser titulares del mismo. Han sido varias las posturas a lo largo del tiempo sobre si las personas jurídicas

pueden ser titulares del mencionado derecho, además de si pueden sufrir un daño moral consecuencia de la vulneración en su honor, ya que la Constitución española no contiene ningún pronunciamiento sobre ello.

Será a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 139/1995, de 26 de septiembre, a partir de la cual se reconocerá el derecho fundamental al honor de las personas jurídicas de derecho privado. Cabe destacar que, en cuanto a las personas jurídicas de derecho público, éstas no son titulares del derecho al honor, pues ya en la sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988 se afirmó que únicamente pueden proclamar su dignidad, prestigio o autoridad moral. Dicha postura será reafirmada también por la Sentencia del Tribunal Supremo 408/2016, de 15 de junio.

### **1.3.1. Personas jurídicas de Derecho público.**

“El derecho al honor tiene en nuestra Constitución un significado personalista, en el sentido de que el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado, respecto de las cuales es más correcto, desde el punto de vista constitucional, emplear los términos de dignidad, prestigio y autoridad moral, que son valores que merecen la protección penal que les dispense el legislador, pero que no son exactamente identificables con el honor, consagrado en la Constitución como derecho fundamental...”<sup>5</sup>.

Este párrafo extraído de la sentencia 107/1988, del Tribunal Constitucional, deja claro que no se puede atribuir el derecho al honor a entidades públicas, debiéndose hablar únicamente en términos de dignidad, prestigio y autoridad moral. Sentencias posteriores reiteraron esta postura, dentro de las cuales cobra especial relevancia la Sentencia del Tribunal Supremo 408/2016.

Que las personas jurídico-públicas no sean titulares de derecho al honor no significa que estén desprotegidas frente a los posibles daños que se les pueda causar, pues la dignidad, el prestigio y la autoridad moral siguen siendo valores protegidos penalmente. Sin embargo, son valores a los que no se les reconoce protección constitucional, y, por lo tanto, van a tener una menor protección en relación con otros

---

<sup>5</sup> STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2.

derechos. Por ejemplo, en su ponderación frente a la libertad de expresión, debe asignárseles un nivel más débil de protección del que correspondería atribuir si ostentasen el derecho al honor.

La relativamente reciente Sentencia del Tribunal Supremo 408/2016, de 15 de junio, reafirmando las sentencias anteriores, decidió fijar como doctrina jurisprudencial la siguiente: “Las personas jurídicas de Derecho público no son titulares del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 de la Constitución Española”<sup>6</sup>. Si nos quedaba alguna duda referente a la titularidad del Derecho al Honor de las personas jurídico-públicas, la sentencia del 2016 nos lo esclarece de forma rotunda asentando como doctrina jurisprudencial que las personas jurídicas de derecho público no son titulares del Derecho fundamental al Honor, debiendo hablar en términos de dignidad, prestigio y autoridad moral en su caso.

En cuanto al asunto que finaliza con la sentencia de 2016, un ayuntamiento asturiano presentó una querella contra un particular (la cual no fue admitida por haber prescrito el presunto delito y se continuó por el procedimiento civil), por un presunto atentado contra el honor, la intimidad personal y la propia imagen de la entidad.

En primera instancia se desestimó la demanda por falta de legitimación activa, ya que correspondería al pleno del ayuntamiento ejercer o ratificar las acciones judiciales, y posteriormente la Audiencia Provincial en apelación, una vez subsanadas las causas de desestimación en la primera instancia, volvió a desestimar la demanda debido a que el particular no había divulgado las presuntas ofensas, entre las cuales destaca la imputación de un delito de falsificación, y por lo tanto no podrían lesionar el honor del ayuntamiento. Posteriormente, la entidad decidió interponer conjuntamente recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Al inicio de la deliberación del asunto en el Tribunal Supremo, se suscitó la cuestión de si las personas jurídicas de Derecho público son, o no, titulares de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 18.1 de la Constitución. Sobre este aspecto la representación de la entidad pública alegó que, de no reconocerse a los Ayuntamientos la posibilidad de ejercitar las acciones civiles de protección del honor, resultaría prácticamente impune toda vulneración de su dignidad y prestigio, ya que en el código

---

<sup>6</sup> STS de 15 de junio de 2016.

penal no se encuentra tipificado el delito de injurias a un Ayuntamiento. Este argumento sería posteriormente desmontado por el Tribunal.

En el fundamento de derecho quinto de la sentencia de 2016, se enumeran las razones que justifican la negación de la titularidad del derecho al honor de las personas jurídico-públicas, comenzando por mencionar los argumentos ya expuestos en la sentencia 107/1988, de 8 de junio, referentes al significado personalista del honor y a que es más correcto referirnos a la dignidad, prestigio y autoridad moral de instituciones públicas. Además, nos recuerda que la Sentencia del Tribunal Constitucional 139/1995, concretamente en su fundamento jurídico quinto, ya afirmó la titularidad del derecho al honor de las personas jurídico privadas, excluyendo indirectamente a las personas jurídicas de derecho público.

Por otro lado, no debemos olvidar que los derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo, pues reconocen y protegen todos aquellos ámbitos de libertades o prestaciones que los poderes públicos deben otorgar o facilitar a los ciudadanos<sup>7</sup>. Es por ello por lo que resultaría improcedente reconocer la titularidad de los mismos a las entidades de Derecho público, pues la noción de derecho fundamental que contiene el artículo 10 de la Constitución Española resulta poco compatible con entes de naturaleza pública<sup>8</sup>.

Las entidades públicas disponen de una amplia gama de potestades, privilegios y prerrogativas, enfocadas a la consecución del interés general, que las coloca en una posición de supremacía frente a los gobernados. Es precisamente por esa supremacía de los poderes públicos por lo que los gobernados deben de disponer de las garantías que les otorgan los derechos fundamentales, ya que, de reconocerse dichos derechos a los entes públicos, los ciudadanos quedarían en una posición de desequilibrio desfavorable frente al Estado. Por lo tanto, el Estado, y las personas jurídicas de Derecho público en general, no serán titulares de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, sino que hablaremos de las competencias propias de sus funciones<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> STC 64/1988, de 12 de abril, FJ 1.

<sup>8</sup> STC 91/1995, de 19 de junio, FJ 2.

<sup>9</sup> STS de 15 de junio de 2016, FJ 5.

En conclusión, está claro que las personas jurídicas de derecho público no pueden ostentar la titularidad del derecho al honor, sin embargo, negarles la titularidad del derecho fundamental no significa que queden desprotegidas, como alegaba la parte demandante en la Sentencia de 2016. En caso de que vean afectado su prestigio o autoridad moral, podrán reclamar la responsabilidad correspondiente con fundamento en el artículo 1902 del Código Civil.

Ahora bien, dicha protección no es equiparable a la que se otorga a las personas que sí son titulares del derecho al honor, pues al no aplicarles la ley 1/1982 no gozarán de los mismos beneficios, como la presunción de perjuicio que establece el artículo 9.3, el mayor plazo de caducidad para la interposición de acciones que señala el párrafo quinto del mismo artículo, o las normas que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para los procesos sobre derechos honoríficos de la persona.

### **1.3.2. Personas jurídicas de Derecho privado.**

Desde que el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 139/1995, de 26 de septiembre, se reconoce que las personas jurídicas de Derecho privado son titulares del derecho al honor reconocido constitucionalmente en el artículo 18.1, cuestión que ha sido ampliamente debatida por la doctrina y que a día de hoy hay autores<sup>10</sup> que siguen negando que las personas jurídicas puedan ser titulares del derecho al honor.

En cuanto al asunto referido en la sentencia de 1995, la revista “Interviú” publicó un reportaje denunciando la supuesta corrupción de algunos responsables de la Guardia Civil de Canarias y acusando a una sociedad mercantil de sobornarlos para encubrir sus numerosas actividades ilegales. Dicha sociedad interpuso una demanda contra los responsables alegando la vulneración de su derecho al honor, demanda que se estimó en parte, considerando que sí hubo una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la empresa demandante. Como podemos observar, no solo nos encontramos ante la cuestión de si las personas jurídico-privadas son titulares del derecho al honor, sino que también se nos plantea la confrontación entre dicho derecho y el derecho a la libertad de información, ambas cuestiones tratadas en la sentencia.

---

<sup>10</sup> DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., Tratado de Responsabilidad Civil, Civitas, Madrid 1993; MORENO MARÍN, M<sup>a</sup>. D., *El daño moral causado a las personas jurídicas*, Dykinson, Madrid 2019.

Como no es de extrañar, los recurrentes en amparo alegaron que se había atribuido indebidamente a las personas jurídico-privadas la titularidad del derecho al honor, cuando lo más adecuado sería hablar en términos de dignidad, prestigio y crédito mercantil, valores no identificables con el derecho al honor del art. 18.1 de la Constitución; y por lo tanto debería de prevalecer el derecho a la libertad de información de los recurrentes. A su vez, el Ministerio Fiscal entendió que existen personas individuales que dirige la sociedad y constituyen su cuerpo social, personas que sí son titulares del derecho fundamental al honor.

Si bien es cierto que la Constitución Española no contiene ningún pronunciamiento general acerca de la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas, también es cierto que ninguna norma impide que éstas puedan ser titulares de los mismo; de hecho, la propia Constitución reconoce de forma expresa derechos fundamentales para determinados tipos de organizaciones.

Además, como señala VIDAL MARÍN<sup>11</sup>, hay que tener en cuenta que los entes colectivos creados por personas físicas son consecuencia del ejercicio de otros derechos fundamentales, como es el derecho de asociación reconocido por el artículo 22 de la Constitución, cuyo ejercicio conlleva que la persona jurídica creada tenga garantizada su libertad de actuación en orden a la consecución de los fines propuestos, para lo cual será necesario que sean titulares de determinados derechos fundamentales. Si el objetivo y función de los derechos fundamentales es la protección del individuo, sea como tal individuo o sea en colectividad, es lógico que las organizaciones que las personas naturales crean para la protección de sus intereses sean titulares de determinados derechos fundamentales, siempre que éstos sirvan para proteger los fines para los que han sido constituidas<sup>12</sup>.

No podemos exigir que las intromisiones en el derecho al honor deban estar necesariamente individualizadas *ad personam* para gozar de protección constitucional, pues ello supondría una desprotección del honor de todas las personas jurídicas, admitiendo la legitimidad constitucional de cualquier lesión en el honor de personas individuales por el mero hecho de que los ataques se realicen de forma genérica e innominada. Por ello, las personas jurídicas podrán ver lesionado su derecho al honor

---

<sup>11</sup> VIDAL MARÍN, T., “Derecho al honor...”, cit., p. 7.

<sup>12</sup> STC 139/1995, de 26 de septiembre, FJ 4.



cuando se realicen divulgaciones de hechos concernientes a su entidad, difamándola o desmereciéndola en la consideración ajena, pudiendo por ello establecerse un ámbito de protección para preservar su identidad cuando desarrolla sus fines y para defender las condiciones de ejercicio de la misma.

Ahora bien, reconocer la titularidad del derecho al honor a las sociedades mercantiles no conlleva que todas las intromisiones en su honor reciban la tutela de la LO 1/1982, pues en ciertas ocasiones pueden constituir actos de competencia desleal, debiendo delimitar “cuándo una lesión en la reputación de una sociedad mercantil es mero acto de difamación y cuándo es acto de competencia o de publicidad desleal (...) mientras un acto de difamación lesiona de manera primaria el honor, en el acto de competencia desleal denigratorio el descrédito no es más que un instrumento para la vulneración de la competencia, que es el bien jurídico lesionado en un acto desleal”<sup>13</sup>.

Si bien la sentencia de 1995 es un punto de inflexión a la hora de reconocer la titularidad del derecho al honor de las personas jurídicas de Derecho Privado, posteriormente la STC 183/1995, de 11 de diciembre, lo volvería a confirmar, y desde entonces, han sido varias las sentencias que han aplicado la mencionada doctrina jurisprudencial<sup>14</sup>.

Por último, cabe destacar que la mencionada doctrina no solo es aplicable a las sociedades mercantiles, como afirma la STS 408/2016, sino también otras entidades creadas por personas físicas, como las asociaciones en general<sup>15</sup>, incluidos los partidos políticos<sup>16</sup>, los sindicatos<sup>17</sup>, las fundaciones<sup>18</sup> y las sociedades mercantiles públicas<sup>19</sup>, basándose siempre en un criterio de aplicación basado en la forma privada o pública de personificación.

---

<sup>13</sup> RODRÍGUEZ GUTIÁN, A. M<sup>a</sup>., “El derecho al honor de las personas jurídicas (Comentario a la STC 139/1995, de 26 de septiembre)”, *Anuario de Derecho Civil*, 1996, p. 815.

<sup>14</sup> SSTC 344/2015, de 16 de junio y 594/2015, de 11 de noviembre.

<sup>15</sup> SSTS de 29 de febrero de 2012 y de 3 de enero de 2014.

<sup>16</sup> STS de 16 de enero de 2010 y STC 79/2014, de 28 de mayo.

<sup>17</sup> SSTS de 19 de julio de 2006, de 27 de noviembre de 2008 y de 21 de octubre de 2014.

<sup>18</sup> STS de 4 de julio de 2012.

<sup>19</sup> STS de 21 de mayo de 2009.

## **2. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE INTROMISIONES ILEGÍTIMAS EN EL DERECHO AL HONOR.**

### **2.1. Responsabilidad civil. Aspectos generales.**

Cuando hablamos de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, nos estamos refiriendo a la obligación de reparar el daño causado por un determinado comportamiento. El nacimiento de dicha obligación encuentra su fundamento en el artículo 1.089 del Código Civil: “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.

Como bien sabemos, la responsabilidad contractual deriva del incumplimiento de un negocio jurídico previo, de un contrato, y su regulación se encuentra en los artículos 1.101 y siguientes del Código Civil; mientras que la responsabilidad extracontractual, no requiere la existencia de ninguna relación jurídica previa entre las partes, sino la causación de un daño a un sujeto que no tiene el deber de soportarlo, como sucede en los supuestos de intromisiones ilegítimas en el derecho al honor; su regulación la encontramos en los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil.

En cuanto al daño causado, este debe ser cierto, directo y personal. Ciertamente en el sentido de que debe poder probarse, a pesar de que ocasionalmente “pueden presumirse producidos y condenar a satisfacerlos sin razonar sobre las pruebas de su existencia que se tiene por evidente”<sup>20</sup>; y directo y personal en el sentido de que “tiene que existir un nexo de causalidad suficientemente fuerte entre el hecho que lo ocasiona y el perjudicado”<sup>21</sup>.

Además, los daños causados pueden ser de carácter patrimonial (daño emergente y lucro cesante), o de carácter extrapatrimonial, más conocidos como daños morales. Dentro del ámbito de los daños morales, podemos diferenciar, como indica LLAMAS POMBO, entre el llamado perjuicio corporal, incluyendo el perjuicio derivado del dolor (*pretium doloris*), el perjuicio estético (*pretium pulcritudinis*), el perjuicio sexual y el perjuicio a la vida en relación; y el daño moral en sentido estricto, resultado de lesionar

---

<sup>20</sup> STS de 23 de febrero de 1998.

<sup>21</sup> VICENTE DOMINGO, E, "El daño", *Lecciones de Responsabilidad Civil*, Aranzadi, 2013, p. 83.

los derechos de la personalidad, como es el caso de las vulneraciones en el honor de las personas<sup>22</sup>.

Otro elemento importante para que surja la obligación de reparar es la existencia de una relación de causalidad, es decir, que el daño causado sea consecuencia de la acción u omisión realizada por el autor y no lo sea por otras causas ajenas. Cabe destacar que, para apreciar la existencia de un nexo causal en el ámbito de los comportamientos omisivos, se requiere que exista un deber jurídico de actuar y que en el caso de haber ejecutado la conducta debida se hubiese evitado el daño causado<sup>23</sup>.

Una vez determinada la existencia de la relación de causalidad entre la conducta y el daño causado, para poder imputar el daño a quien lo causó entra en juego lo que conocemos como elemento de imputación, el cual podemos concretarlo en la existencia de culpa o negligencia (responsabilidad subjetiva), o mediante la creación de un riesgo (responsabilidad objetiva o por riesgo).

En lo que a la prueba de la culpa se refiere, debemos hacer mención a la llamada responsabilidad con inversión de la prueba de la culpa, cuya inversión debe determinarse, según indica LUIS DÍEZ-PICAZO, por “la complejidad técnica, o tecnológica, si se prefiere hablar así, del proceso factual que ha conducido a un daño, cuando es complejo, resulta inasequible o es muy difícilmente accesible para el perjudicado, quien es quien lo tiene que ofrecer como fundamento de su demanda”<sup>24</sup>, exigiendo al demandado probar la concurrencia de una circunstancia de exoneración que indique que la causa del daño fue otra, o que su actuación fue llevada a cabo con la debida diligencia exigida; dependiendo del supuesto en concreto, la diligencia exigida será mayor o menor.

---

<sup>22</sup> LLAMAS POMBO, E, “Formas de reparar el daño”, *Sobre la responsabilidad civil y su valoración*, Sepin, Madrid 2009, p. 20.

<sup>23</sup> REGLERO CAMPOS, F, “El nexo causal. Las causas de exoneración de responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor. La concurrencia de culpas”, *Lecciones de Responsabilidad Civil*, Aranzadi, 2013, p. 118.

<sup>24</sup> DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, L, “Culpa y riesgo en la Responsabilidad Civil Extracontractual”, *AFDUAM*, 2000, p. 164.

## **2.2. Regulación: Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.**

Una vez analizado que únicamente las personas jurídicas de derecho privado, además de las personas físicas, pueden ser titulares de derecho al honor, procederemos a analizar la legislación aplicable en materia civil ante las vulneraciones en el derecho al honor de las personas, cuya finalidad se asienta en el principio general de garantía de los derechos fundamentales.

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, tiene como objeto la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, frente a las posibles injerencias o intromisiones ilegítimas por parte de terceros; cabe destacar que no tendrán la consideración de ilegítimas cuando estén expresamente autorizadas por alguna ley, o cuando el propio titular del derecho hubiere otorgado consentimiento expreso.

La protección civil del honor está delimitada por las leyes, pero también por los usos sociales propios de cada ámbito. En lo que respecta a las personas jurídicas de Derecho privado, una intromisión o injerencia ilegítima en su derecho al honor podría consistir en un menoscabo en su reputación, así como en un desmerecimiento en la consideración ajena que afectaría a la consecución de los objetivos sociales.

### **2.2.1. Intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del derecho al honor.**

El artículo 7 de la LO 1/1982 nos indica qué conductas van a tener la consideración de intromisiones ilegítimas en los derechos a los que se refiere la presente ley. En el ámbito de protección del derecho al honor, tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas las siguientes:

“3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

8. La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas.”<sup>25</sup>

Cabe destacar que existen supuestos de exclusión en los que, a pesar de que exista una intromisión en el derecho al honor, ésta no será ilegítima. La LO 1/1982 excluye la ilegitimidad de todas aquellas intromisiones en el derecho que se realicen mediando expresa autorización por la ley, o cuando el titular del derecho hubiera otorgado su consentimiento expreso. También se tendrá en cuenta el ejercicio de las libertades públicas, pues en tales casos, como se analizará en ulteriores apartados, el tribunal deberá realizar una ponderación los derechos en conflicto para decidir cuál debe prevalecer.

### **2.2.2. Reparación del daño y carga de la prueba.**

Cuando el derecho al honor de una persona, tanto física como jurídica, se ve lesionado a causa de una intromisión ilegítima por parte de un tercero, se deberán llevar a cabo todas las medidas necesarias para que cese dicha intromisión ilegítima, para que no se vuelva a repetir posteriormente y para restablecer al perjudicado al estado en el que se encontraba antes de dicha intromisión.

Para que se produzca un restablecimiento total del derecho al honor de la víctima, no bastará con la mera declaración de la intromisión sufrida y la indemnización por daños y perjuicios causados, sino que el autor de la intromisión también deberá publicar total o parcialmente la sentencia condenatoria con al menos la misma difusión pública que tuvo la información mediante la cual se vulneró el honor; esta situación se da con bastante frecuencia en la práctica, pues la mayoría de intromisiones se realizan a través de los medios de comunicación o de redes sociales.

Ahora bien, la regla general para que pueda tener lugar la reparación del daño impone el deber de acreditar la existencia de un perjuicio real. Ante la dificultad que podría suponer en determinadas ocasiones probar dicho perjuicio, el apartado tercero del artículo 9 de la LO 1/1982 establece una presunción de existencia de perjuicio siempre

---

<sup>25</sup> Artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

que se acredite la intromisión ilegítima. Sin embargo, dicho artículo no especifica de qué tipo de presunción se trata, es decir, si es una presunción *iuris et de iure* o *iuris tantum*, pues la diferencia puede ser crucial a la hora de otorgar al demandado la posibilidad de probar la ausencia de perjuicio.

En contra de lo establecido en el artículo 385.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>26</sup>, el Tribunal Supremo, en varias sentencias, ha interpretado que la presunción a la que se refiere el artículo 9.3 es una presunción *iuris et de iure*<sup>27</sup>, pues considera que una intromisión ilegítima en el derecho al honor de una persona conlleva implícitamente la causación de un daño moral, daño que deberá ser reparado mediante la correspondiente indemnización. Es preciso destacar que dicha presunción absoluta solo rige para los daños morales debido a su dificultad probatoria, pues los daños patrimoniales deberán ser demostrados conforme a las reglas de prueba comunes<sup>28</sup>.

Como ya hemos señalado en apartados anteriores, parte de la doctrina sigue negando que las personas jurídicas puedan sufrir daños morales, así como que sean titulares del derecho al honor, sin embargo, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia sí que acepta la posibilidad de que las personas jurídico-privadas puedan sufrir daños morales como consecuencia de ver lesionado su derecho al honor, sin que ello suponga necesariamente una disminución del patrimonio.

Las personas jurídicas de derecho privado, al ser titulares del derecho al honor, van a gozar de la presunción de perjuicio que les otorga el artículo 9.3 de la LO 1/1982, debiendo probar únicamente que se ha producido una intromisión ilegítima en su derecho al honor para que se presuma la existencia de un daño moral, y, por lo tanto, para que pueda ser resarcido. No obstante, esta cuestión no es pacífica entre la doctrina, como señalaremos en las siguientes páginas, habiendo autores que afirman la posibilidad de que exista una intromisión ilegítima en el honor sin que ésta llegue a producir un daño real, o porque el mismo haya sido reparado ya de forma específica<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Artículo 385 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: 3. *Las presunciones establecidas por la ley admitirán la prueba en contrario, salvo en los casos en que aquélla expresamente lo prohíba.*

<sup>27</sup> SSTs de 18 de febrero de 2015, de 2 de septiembre de 2015, de 16 de febrero de 2016 y de 21 de diciembre de 2016.

<sup>28</sup> ATIENZA NAVARRO, M<sup>a</sup>. L., “Indemnizaciones de daños y perjuicios e intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, *Revista bolivariana de derecho*, 2013, p. 220.

<sup>29</sup> ATIENZA NAVARRO, M<sup>a</sup>. L., “Indemnizaciones de daños..., op., pp. 222-228.

Por otro lado, al no reconocer a las personas jurídicas de derecho público la titularidad del derecho al honor, éstas no van a gozar del beneficio de ninguna presunción de existencia de daño, ni absoluta ni relativa, suponiendo mayores dificultades para obtener una indemnización cuando vean vulnerada su dignidad, prestigio institucional o su autoridad moral. Para reclamar, no solo deberán probar la agresión sufrida sino también el perjuicio real que se les ha ocasionado –con la dificultad probatoria que suponen los daños morales–, con fundamento en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil.

### **2.3. Reparación y cuantificación del daño causado por una intromisión ilegítima en el derecho al honor.**

Las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor de las personas pueden causar tanto daños morales como daños patrimoniales, surgiendo a su vez la obligación de repararlos por el causante del daño. Como ya hemos comentado, el daño moral se presume por el mero hecho de demostrarse la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho, sin embargo, los daños patrimoniales no gozarán de esa suerte de presunción y deberán ser probados mediante el procedimiento común.

En términos económicos, podemos diferenciar ambos tipos de daños en función de cómo el dinero puede restaurar la utilidad perdida por el daño sufrido: “El daño patrimonial provoca una disminución de utilidad que es compensable con dinero o con bienes intercambiables por dinero. El daño no patrimonial o moral, por el contrario, implica una reducción del nivel de utilidad que ni el dinero, ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a compensar”<sup>30</sup>.

#### **2.3.1. Daño patrimonial.**

Podemos definir los daños patrimoniales como “los que sufre el perjudicado en la esfera de su patrimonio, entendiendo como conjunto de bienes y derechos de naturaleza patrimonial (...) evaluables económicamente por referencia al valor que el bien dañado tiene en el mercado”<sup>31</sup>. Dentro de esta modalidad de daños diferenciamos entre el daño

---

<sup>30</sup> GÓMEZ POMAR, F., “Daño moral”, *InDret*, 2000, p. 1.

<sup>31</sup> VICENTE DOMINGO, E, “El daño...”, cit., p. 84.

emergente y el lucro cesante, siendo este último el que presenta una mayor dificultad probatoria.

En el ámbito de la LO 1/1982, los daños patrimoniales no se presumen por el simple hecho de existir una intromisión ilegítima, por lo que deberá demostrarse su existencia según el método de prueba común. En un primer momento se discutió la aplicabilidad de la presunción del artículo 9.3 de la LO 1/1982 para los daños patrimoniales, admitiendo prueba en contrario (presunción *iuris tantum*), sin embargo, en el año 2002 el Tribunal Supremo<sup>32</sup> señaló que los daños patrimoniales deben ser demostrados mediante el procedimiento común y en ningún caso presumidos por el mero hecho de existir una intromisión.

Si bien es cierto que los daños patrimoniales deben ser demostrados, algunos autores<sup>33</sup> opinan que existen casos donde los tribunales “disfrazan” ciertos daños patrimoniales de difícil prueba –lucro cesante– como daños morales, aligerando así la carga probatoria de los demandantes.

### **2.3.2. Daño moral.**

Como hemos expuesto en apartados anteriores, tanto la jurisprudencia como la doctrina mayoritaria asimila la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor con la existencia de un daño moral, sin embargo, su cuantificación es una cuestión más controvertida, sobre todo en los supuestos donde el titular del derecho al honor lesionado es una persona jurídica.

La LO 1/1982 en su artículo 9.3 establece que el daño moral se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, cobrando en determinados supuestos una especial importancia la difusión del medio a través del que se haya producido.

Al aludir a las “circunstancias del caso” debemos entender que se refiere a las circunstancias subjetivas del mismo, como puede ser la edad o la reputación social del agraviado por la intromisión ilegítima. Cuando se refiere a la “gravedad de la lesión

---

<sup>32</sup> STS de 25 de noviembre de 2002, FJ 3.

<sup>33</sup> GÓMEZ POMAR, F., “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, 20.2.2002: el daño moral de las personas jurídicas”, *InDret*, 2002, p. 5.



efectivamente producida” está aludiendo al perjuicio real que ha sufrido la víctima, independientemente de la gravedad de la intromisión ilegítima<sup>34</sup>.

Otro de los factores que menciona la ley para valorar el daño moral en determinadas ocasiones, es “la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido”, es decir, cuando la intromisión ilegítima se lleve a cabo a través de algún medio de comunicación social, o a través de Internet, se deberá tener en cuenta diversos factores, como el número de ejemplares vendidos o la zona donde se consuma dicho medio de comunicación.

En el caso de que la intromisión ilegítima se lleve a cabo a través de internet, para la valoración del daño moral también se deberá tener en cuenta si dicha intromisión se ha llevado a cabo en una web o un perfil abierto, así como el ámbito geográfico de difusión del contenido<sup>35</sup>, pues serán aspectos clave a la hora de determinar la cuantía de la indemnización. Las intromisiones ilegítimas llevadas a cabo a través de Internet se analizarán más a fondo en posteriores apartados.

Por otro lado, en lo referente a la competencia para determinar la cuantía de la indemnización, serán los Tribunales de instancia los encargados de fijarla en base a los criterios expuestos, pudiendo únicamente modificarla el Tribunal Supremo cuando aprecie que los tribunales de instancia han errado a la hora de interpretar los criterios valorativos, o su ponderación sea desproporcionada o arbitraria<sup>36</sup>.

### **2.3.3. Daño moral y personas jurídicas.**

Si bien doctrina y jurisprudencia española están divididas a la hora de determinar si las personas jurídicas pueden sufrir o no daños morales, la doctrina mayoritaria aboga por conceder dicha posibilidad.

La postura que niega que dichos entes puedan sufrir daños morales se asienta en el concepto restringido de daño moral, asimilando dicho concepto de daño con el dolor o sufrimiento, aspectos que quedan fuera del ámbito de las personas jurídicas. Por otra

---

<sup>34</sup> ATIENZA NAVARRO, M<sup>a</sup>. L., “Indemnizaciones de daños..., cit., p. 230.

<sup>35</sup> ESCRIBANO TORTAJADA, P., “El derecho al honor y a la propia imagen en internet y las redes sociales: algunos problemas que se plantean en relación con la responsabilidad civil”, *Congreso Internacional de Derecho Civil*, Tirant lo Blanch, Salamanca 2018, p. 539.

<sup>36</sup> ATIENZA NAVARRO, M<sup>a</sup>. L., “Indemnizaciones de daños..., cit., pp. 232 y 233.

parte, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria en España sí reconocen la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir daños morales cuando se dificulte o impida la satisfacción de uno de sus intereses sin disminución del patrimonio, como consecuencia de ser titulares de ciertos derechos –como el derecho al honor– y tener que cumplir obligaciones<sup>37</sup>; incluyendo a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuando sufran un menoscabo que impida o dificulte el cumplimiento de los fines para los que fueron constituidas<sup>38</sup>.

Reconocer que las personas jurídicas puedan sufrir daños morales conlleva el acogimiento de un concepto amplio de daño moral, más allá del simple dolor o sufrimiento físico o psíquico, partiendo “no del punto de vista del interés lesionado, sino del punto de vista de las consecuencias de la lesión”<sup>39</sup>. Además, debemos señalar que existe una distinción entre el daño moral que sufren las personas físicas y el que sufren las personas jurídicas, pues, como señala la sala primera del Tribunal Supremo, “a diferencia de los entes físicos en que el daño moral se traduce en sufrimiento, angustia, preocupación, en los entes jurídicos se manifiesta en el prestigio y estima moral en el concepto público”<sup>40</sup>.

Igualmente, no debemos olvidar que el hecho de reconocer a determinadas personas jurídicas la titularidad del derecho al honor en sentido objetivo<sup>41</sup> supone admitir la existencia de daños morales, ya que el honor es un concepto de carácter extrapatrimonial.

A pesar de la presunción de daño moral que establece el artículo 9.3 de la LO 1/1982, algunos autores no consideran admisible su aplicación a las personas jurídicas que vean vulnerado su honor, ya que la intromisión ilegítima no siempre tiene que causar un daño moral, generando así un enriquecimiento injusto en detrimento de los demandados. En la práctica, según la opinión de varios autores<sup>42</sup>, se considera un daño moral lo que en realidad es un daño patrimonial de difícil prueba. No obstante, en ciertos supuestos en los que exista un beneficio por parte del autor de la intromisión ilegítima,

---

<sup>37</sup> MORENO MARÍN, M<sup>a</sup>. D., *El daño moral...*, cit., pp. 304-308.

<sup>38</sup> MORENO MARÍN, M<sup>a</sup>. D., *El daño moral...*, cit., p. 389

<sup>39</sup> MORENO MARÍN, M<sup>a</sup>. D., *El daño moral...*, cit., p. 309.

<sup>40</sup> STS de 20 de febrero de 2002, FJ 5.

<sup>41</sup> STC 139/1995, de 26 de septiembre.

<sup>42</sup> GÓMEZ POMAR, F., “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo...”, op., p. 3; MORENO MARÍN, M<sup>a</sup>. D., *El daño moral...*, op., p. 312.

podríamos entender que dicho beneficio es una suerte de daño moral para la víctima, por el hecho de ver como otro sujeto se enriquece a costa de vulnerar sus derechos<sup>43</sup>.

Si bien esta es la opinión de algunos autores, doctrina y jurisprudencia abogan por admitir el beneficio de la presunción en determinados supuestos, en los que hay una profunda interrelación entre la persona jurídica y las personas físicas que la integran, y éstas puedan ver lesionados sus derechos de la personalidad como consecuencia del daño a la entidad<sup>44</sup>.

En conclusión, podemos afirmar que la presunción a la que se refiere el artículo 9.3 de la LO 1/1982 es de una indudable utilidad para resarcir a las personas físicas que vean vulnerado su honor; sin embargo, aplicar la presunción de daño moral a las personas jurídicas es más que cuestionable, pues en la mayoría de los casos se indemnizará un daño moral que en realidad es un daño patrimonial –lucro cesante– de difícil prueba. Como indica GOMEZ POMAR, “el Tribunal Supremo tiene la tentación (...) de disfrazar esas pérdidas patrimoniales de ardua prueba como daños no patrimoniales”<sup>45</sup>, aligerando la carga de la prueba a los demandantes.

#### **2.4. Diferencias con el régimen general de responsabilidad contenido en el artículo 1902 del código civil.**

Como podemos observar de lo expuesto hasta ahora, existen ciertas diferencias entre el régimen de protección civil del derecho al honor contenido en la LO 1/1982, y el régimen común de responsabilidad civil contenido en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil.

En primer lugar, merece darle una especial relevancia a la prueba del perjuicio causado, pues es un requisito clave a tener en cuenta en el régimen común, ya que si no existe un perjuicio cierto no nacerá la obligación de repararlo. Sin embargo, el apartado tercero del artículo 9 de la Ley de Protección Civil del Honor establece una presunción absoluta<sup>46</sup> de perjuicio cuando se pueda acreditar que se ha producido una intromisión

---

<sup>43</sup> LLAMAS POMBO, E, “Formas de reparar el daño..., op., p. 78.

<sup>44</sup> MORENO MARÍN, M<sup>a</sup>. D., *El daño moral...*, cit., p. 391.

<sup>45</sup> GÓMEZ POMAR, F., “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo..., cit., p. 5.

<sup>46</sup> SSTs de 18 de febrero de 2015, de 2 de septiembre de 2015, de 16 de febrero de 2016 y de 21 de diciembre de 2016.

ilegítima en el mismo. Esta presunción de perjuicio resulta una cuestión clave a la hora de determinar si procede una indemnización de daños y perjuicios.

Otro factor a tener en cuenta es el elemento de la culpa en las intromisiones ilegítimas, pues la LO 1/1982 no hace ninguna referencia al mismo, lo que podría llegar a suponer que nos encontramos ante su no exigencia y, por lo tanto, ante una auténtica responsabilidad subjetiva. Sin embargo, la culpa como elemento de imputación tiene carácter de principio general en la responsabilidad civil extracontractual, pudiendo afirmar que es de aplicación respecto de las intromisiones ilegítimas en el honor<sup>47</sup>.

Por último, debemos hacer referencia al plazo de prescripción de las acciones. El Código Civil, en su artículo 1.968, establece el plazo de prescripción de un año para ejercitar “la acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado”<sup>48</sup>. Esto supone una importante diferencia con el régimen de la LO 1/1982, que establece un plazo de caducidad de cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitar la acción.

### **3. INTERPOSICIÓN DE ACCIONES CIVILES.**

Las personas que vean vulnerado su derecho al honor, así como las demás personas designadas por la LO 1/1982 en los supuestos de fallecimiento del titular del derecho lesionado, disponen de la capacidad para interponer acciones civiles con el fin de que cese y no vuelva a reiterarse la intromisión ilegítima que les perjudica, y para solicitar una indemnización por todos los daños y perjuicios que dicha intromisión les haya producido. También deberemos tener en cuenta el derecho de rectificación, cuyo ejercicio es compatible con las acciones mencionadas; más adelante analizaremos la Ley que regula dicho derecho de rectificación.

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 248 y 249, establece que las demandas que pretendan la tutela del derecho fundamental al honor, cualquiera que sea su cuantía, se decidirán en juicio declarativo ordinario, en el cual va a ser parte el Ministerio Fiscal, y su tramitación tendrá carácter preferente. En cuanto al plazo para

---

<sup>47</sup> ROVIRA SUEIRO, M<sup>a</sup> E., *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*, A Coruña 1997, p. 443.

<sup>48</sup> Artículo 1968 del Código Civil.

interponer la demanda, el artículo 9.5 de la Ley Orgánica 1/1982 establece un plazo de caducidad de 4 años desde que el legitimado pudo ejercitar la acción, es decir, desde que tuvo conocimiento de la intromisión ilegítima.

El artículo 9 de la LO 1/1982, además de establecer que la tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas podrá recabarse por las vías procesales ordinarias, también hace referencia a la posibilidad de acudir al procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución, así como al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional cuando proceda.

Como podemos observar de lo expuesto en el artículo 9 de la mencionada ley, la protección civil del honor no se limita a la indemnización de los daños y perjuicios causados, sino que va más allá, pudiendo adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima.

En particular, junto a la acción indemnizatoria, se adoptarán las medidas necesarias para: “a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida. b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores. (...) d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos”<sup>49</sup>.

Por último, no debemos olvidar que en determinadas ocasiones la vulneración del derecho al honor de una persona jurídica de derecho privado puede suponer un ilícito de competencia desleal, como por ejemplo el contenido en el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal<sup>50</sup>. En cuyo caso, el conocimiento de las acciones corresponderá a los Juzgados de lo Mercantil.

---

<sup>49</sup> Artículo 9.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

<sup>50</sup> Artículo 9 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: *Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.*

### **3.1. Legitimación activa.**

La legitimación activa para ejercitar las acciones protectoras del derecho al honor corresponderá exclusivamente al titular del derecho lesionado. Cabe destacar que, en los supuestos en los que la intromisión ilegítima recaiga sobre las víctimas de un delito al que se refiere el artículo 7.8 de la LO 1/1982, también estará legitimado en todo caso del Ministerio Fiscal.

En el caso de fallecimiento del titular del derecho, la interposición de acciones corresponderá a quien haya designado en su testamento o, en caso de que dicha persona no pudiera ejercerlas o simplemente no se haya designado ninguna persona, corresponderá la legitimación activa al cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos de la persona fallecida, y a falta de todos ellos, corresponderá el ejercicio al Ministerio Fiscal, siempre que no hayan transcurrido ochenta años desde el fallecimiento del perjudicado<sup>51</sup>.

Por otro lado, en cuanto a las intromisiones en el derecho al honor de una persona jurídica de derecho privado, estarán legitimadas para el ejercicio de las acciones aquellas personas que legalmente le representen<sup>52</sup>, es decir, aquellas personas previstas legalmente o estatutariamente, como puede ser el órgano de administración de la sociedad.

### **3.2. Legitimación pasiva.**

En lo que respecta a la legitimación pasiva, es decir, contra qué persona o personas se interpone la demanda, ostentará dicha legitimación aquellas que intervinieron en los hechos generadores de la intromisión ilegítima.

Esta cuestión, que aparentemente no suscita ningún problema, toma una especial relevancia en los supuestos en los que hay varios intervinientes. Un claro ejemplo sería el supuesto en el que la intromisión ilegítima se produce a través de un medio de comunicación, donde nos encontramos con el sujeto que redacta el comentario, y los encargados de introducirlo en dicha plataforma y de la posterior difusión.

---

<sup>51</sup> Artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.

<sup>52</sup> Artículo 7.4 de Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Cuando se trate de intromisiones ilegítimas que puedan ser constitutivas de un delito, el Código Penal en su artículo 30 otorga una legitimación pasiva escalonada, excluyente y subsidiaria<sup>53</sup>.

Ahora bien, en lo que respecta a la responsabilidad civil, debemos acudir a la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, la cual en el segundo párrafo de su artículo 65 establece una responsabilidad civil solidaria para los autores, directores, editores, impresores e importadores o distribuidores de impresos extranjeros. Esto supone, como señala URIARTE VALIENTE, la aplicación del artículo 1.144 del Código Civil, mediante el cual se permite al titular del crédito demandar a cualquiera de los deudores solidarios<sup>54</sup>.

Cuando la intromisión ilegítima se lleve a cabo a través de Internet y se desconozca la identidad del infractor, la víctima también podrá acudir al gestor de la web o de la plataforma, con el fin de que elimine tal publicación<sup>55</sup>. Las cuestiones relativas a las intromisiones ilegítimas a través de Internet se estudiarán más a fondo en el último apartado del presente trabajo.

Por ente, en virtud de lo expuesto sobre la legitimación pasiva, podemos concluir afirmando que serán civilmente responsables, de forma solidaria, todos aquellos sujetos que intervengan de alguna forma en la creación o difusión de la publicación que constituya una intromisión ilegítima en el honor de otra persona. Y lo serán de forma subsidiaria los gestores de las webs o plataformas donde se difunda la información, cuando se desconozca la identidad del infractor, y éstos no actúen con la diligencia debida retirando la información de la plataforma.

---

<sup>53</sup> Artículo 30 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: *Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden: 1.º Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo. 2.º Los directores de la publicación o programa en que se difunda. 3.º Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. 4.º Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.*

<sup>54</sup> URIARTE VALIENTE, L. Mª., “Algunos aspectos procesales de la tutela jurisdiccional civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (I)”, *Boletín del Ministerio de Justicia*, 2005, p. 1406.

<sup>55</sup> Artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

### 3.3. El derecho de rectificación: Ley Orgánica 2/1984.

El derecho de rectificación está regulado por la Ley Orgánica 2/1984, y su artículo primero lo define como el “derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle un perjuicio”<sup>56</sup>. Como podemos deducir del precepto, es un derecho que limita la libertad de información, constituyendo “una buena prueba de que las extralimitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión otorgan al ciudadano, y a las personas jurídicas afectadas, instrumentos de defensa o protección”<sup>57</sup>.

El derecho de rectificación sustituye de alguna manera al derecho de réplica al que se refiere el artículo 9.2.a) de la LO 1/1982, como una medida ante los ataques contra el honor que ofrecía la posibilidad de adoptar medidas preventivas, como responder a ciertas apreciaciones, opiniones y juicios de valor ante una información que le afectara; con la nueva ley reguladora del derecho de rectificación se derogaron los preceptos de la Ley 14/1966 que se referían al derecho de réplica. Como bien señala MARIANO YZQUIERDO, con el derecho de rectificación podemos observar una finalidad diferente, pues lo que pretende es “dar al perjudicado la posibilidad de aclarar, contestar o desmentir unos hechos difundidos por cualquier medio de comunicación”<sup>58</sup>.

Cabe destacar que no solo las personas titulares del derecho al honor van a poder ejercitar el derecho de rectificación, pues la ley atribuye dicho derecho a toda persona natural o jurídica; además, como reafirma la jurisprudencia “de este derecho son titulares incluso las administraciones públicas aunque no sean titulares del derecho al honor”<sup>59</sup>.

En cuanto al procedimiento para ejercitarlo, la persona perjudicada o su representante -o sus herederos en el caso de que hubiera fallecido- deberá remitir un escrito al medio de comunicación, expresando qué concreta información desea rectificar. Hay que tener en cuenta que dicho escrito deberá enviarse dentro de los siete días naturales siguientes a la publicación de la información que se desea rectificar.

---

<sup>56</sup> Artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

<sup>57</sup> CARRILLO, M., “Libertad de expresión y derecho de rectificación en la Constitución Española de 1978”, *Revista de Derecho Político*, 1986, p. 43.

<sup>58</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., “Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2017 (376/2017). Alcance del derecho de rectificación”, *BOE*, 2017, p. 375.

<sup>59</sup> STS de 4 de octubre de 2019, FJ 3.



Una vez remitido el escrito de rectificación, el director del medio de comunicación tendrá que publicarlo en los tres días siguientes en un medio con la misma relevancia. Ahora bien, en el caso de no llevarse a cabo dicha publicación en el plazo previsto, o ante la negativa del director del medio, el perjudicado podrá ejercitar la acción de rectificación ante el juzgado de primera instancia de su domicilio o donde se encuentre la dirección del medio; el plazo para ejercitar dicha acción será de siete días hábiles desde la negativa del director o desde el transcurso del plazo establecido para publicar la rectificación.

En el caso de que el juez admita a trámite la acción, convocará a las partes a un juicio verbal, que se celebrará en los siete días siguientes al de la petición. En el caso de que la sentencia estime procedente la rectificación, ésta deberá publicarse en los tres días siguientes a la notificación de la sentencia.

#### **4. DERECHO AL HONOR Y DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN.**

Cuando nos encontramos ante una supuesta injerencia o intromisión ilegítima en el derecho al honor de las personas, no es de extrañar que dicha intromisión provenga de una publicación en periódicos o revistas, o simplemente, en algún artículo o foro de Internet.

El conflicto existente entre el derecho al honor y las libertades de expresión e información es inexorable, pues ambos “inciden, aunque desde puntos de vista diferentes, sobre un mismo objeto: la actuación social de la persona”<sup>60</sup>. Por esta razón, analizar el conflicto existente entre ambos derechos constitucionalmente reconocidos supone una cuestión clave para resolver una gran parte de pleitos referentes a intromisiones en el derecho al honor.

El ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y libertad de información, reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española, está limitado por el derecho al honor, a pesar de que los mencionados derechos tienen el mismo rango constitucional. El propio artículo 20 señala que estas libertades públicas tienen como límite el respeto a los derechos reconocidos en el mismo título, mencionando de forma

---

<sup>60</sup> PADILLA RUIZ, P., “El conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2011, p. 8.

expresa el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Dicho límite lo vuelve a recoger expresamente la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.

Debido a la identidad jerárquica de la que disfrutaban los derechos fundamentales, los tribunales serán los encargados en cada caso de ponderar qué derecho debe prevalecer, acudiendo a la técnica de ponderación y a la proporcionalidad, y en virtud de una serie de criterios valorativos que ha ido estableciendo la jurisprudencia a lo largo del tiempo.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia defienden una cierta prevalencia del derecho al honor sobre las libertades contenidas en el artículo 20 de la Constitución, sin embargo, deberán de prevalecer éstas últimas cuando la información sea verídica, la persona afectada sea una personalidad pública o esté implicada en asuntos de relevancia pública, y cuando la información sea considerada de interés general o social<sup>61</sup>.

En todo caso, cuando nos encontremos ante un conflicto entre los mencionados derechos fundamentales, el tribunal competente tendrá que realizar “una necesaria y casuística ponderación entre uno y otras”<sup>62</sup>, pues, aunque el derecho al honor sea un límite expreso de las libertades del artículo 20 CE, éstas suponen “el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático”<sup>63</sup>.

#### **4.1. Criterios de la ponderación.**

A lo largo del tiempo, la jurisprudencia constitucional ha ido perfilando qué criterios deben guiar la ponderación por parte de los tribunales en los casos de conflicto entre estos derechos fundamentales. Dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podemos señalar entre otras la Sentencia 105/1990, de 6 de junio, la cual recopila una serie de criterios que expondremos en las siguientes líneas.

En primer lugar, hay que diferenciar entre la libertad de expresión y la libertad de información, pues la primera consiste en la emisión de juicios y opiniones personales, mientras que la segunda se basa en la manifestación de hechos, sin entrar en la valoración

---

<sup>61</sup> NÚÑEZ MARTÍNEZ, M<sup>a</sup> A., “El Tribunal Constitucional y las libertades del artículo 20 de la Constitución Española” *Revista de Derecho UNED*, 2008, pp. 302 y 303.

<sup>62</sup> STC 104/1986, de 17 de julio, FJ 4.

<sup>63</sup> STC 12/1982, de 31 de marzo FJ 3.

de los mismos. En este aspecto, el ejercicio de la libertad de expresión se verá limitado sólo cuando se utilicen “expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas”<sup>64</sup>.

Por otro lado, en cuanto a la libertad de información, el principal criterio para ponderar los derechos en conflicto será si dicha información es veraz o no, pues en caso de que la información sea falsa, prevalecerá en todo caso los derechos del artículo 18 de la Constitución. Se entenderá que la información es veraz cuando sea “comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras insidias”<sup>65</sup>.

En segundo término, los tribunales deberán de tener en cuenta a la hora de otorgar protección constitucional a las libertades de expresión e información, si mediante su ejercicio se contribuye a formar una opinión pública libre, siempre que la información sea veraz y verse, como hemos indicado anteriormente, sobre personalidades públicas o personas implicadas en asuntos de relevancia pública. Además, también se deberá tener en cuenta si la persona que ejerce las mencionadas libertades es un profesional la información o no, así como el medio de difusión utilizado.

Por último, debemos recordar que en el caso de las personas jurídicas de derecho público no se debe hablar del honor constitucionalmente reconocido, sino de dignidad, prestigio y autoridad moral, valores que “en su ponderación frente a la libertad de expresión debe asignárseles un nivel más débil de protección del que corresponde atribuir al derecho al honor”<sup>66</sup>.

## **5. INTROMISIONES ILEGÍTIMAS A TRAVES DE INTERNET.**

Actualmente, Internet forma parte de nuestras vidas facilitando nuestro día a día y otorgándonos la posibilidad de acceder y difundir una gran cantidad de información en cualquier momento, lo que también supone una ampliación de la posibilidad de vulnerar

---

<sup>64</sup> STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4.

<sup>65</sup> STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 5.

<sup>66</sup> STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2.

el derecho al honor de otras personas sin que se pueda identificar al responsable en muchas ocasiones.

Como ya hemos comentado anteriormente, para valorar el daño moral producido por las intromisiones ilegítimas a través de internet, cobrará una especial importancia si se han llevado a cabo en una web pública o perfil abierto, así como el ámbito geográfico de difusión del contenido, pues serán aspectos determinantes para conocer la difusión del contenido y, por lo tanto, para poder valorar el daño moral causado.

En estos casos, el perjudicado podrá acudir al gestor de la web o de la plataforma para que proceda a eliminar tal publicación, pero también dispondrá de la posibilidad de acudir directamente a los Tribunales para exigir la retirada de la información y una indemnización de daños y perjuicios, y en caso de que los hechos sean constitutivos de delito, exigir la condena del responsable.

Resulta una cuestión relevante los supuestos en los que no es posible identificar la identidad de la persona que publica tal información, pues en estos casos habrá que acudir a la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en la cual se establece una responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, así como de los administradores de plataformas virtuales, siempre que éstos tuvieran conocimiento de que la información es ilícita y vulnera derechos de alguna persona, y aun así no actuaran con la diligencia debida y la retiren<sup>67</sup>; la propia Ley especifica cuándo se considerará que el prestador de servicios tiene un conocimiento efectivo<sup>68</sup>.

En consecuencia, al responder los sujetos mencionados por las posibles vulneraciones en el honor de otras personas llevadas a cabo mediante su “plataforma”, cabe la posibilidad de que los intermediarios se conviertan, como señala ESCRIBANO TORTAJADA, en jueces involuntarios, “teniendo en cuenta que la información ilícita en ocasiones es difícil de determinar, e incurrir en una especie de autocensura en detrimento

---

<sup>67</sup> PARRA MEMBRILLA, L., “Responsabilidad civil derivada de la vulneración de los derechos de la personalidad en la red”, *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, 2017, pp. 35 y 38.

<sup>68</sup> Artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico: *Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.*

de la libertad de expresión, puesto que retirarán contenidos ante posibles quejas, sin tener en cuenta si realmente se tratan de contenidos ilícitos”<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> ESCRIBANO TORTAJADA, P., “El derecho al honor..., cit., p. 536.

## **6. CONCLUSIONES.**

### **I**

Las personas jurídicas de derecho público no son titulares de los derechos reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución Española. Como ha reiterado numerosas veces la jurisprudencia de nuestro país, cuando hablamos de entidades públicas lo correcto es referirse a la dignidad, prestigio y autoridad moral de las mismas, valores protegidos legalmente, pero no identificables con el derecho al honor constitucionalmente reconocido. Las entidades públicas ya se encuentran en una posición de supremacía frente a los ciudadanos, al disponer de potestades, privilegios y prerrogativas enfocadas a la consecución del interés general, por lo que reconocerles la titularidad del derecho al honor a los entes públicos supondría que los ciudadanos quedaran en una posición de desequilibrio desfavorable frente al Estado.

### **II**

El reconocimiento de la titularidad del derecho al honor a las personas jurídicas de derecho privado –incluyendo asociaciones, partidos políticos, sindicatos, fundaciones y sociedades mercantiles públicas, basándose siempre en un criterio de aplicación basado en la forma privada o pública de personificación– deviene de la necesidad de dotar a dichas entidades de la protección necesaria para garantizar la consecución de los fines para los cuales han sido creadas. Si el objetivo y función de los derechos fundamentales es la protección del individuo, es lógico que las entidades que las personas físicas crean para la protección de sus intereses sean titulares de determinados derechos fundamentales, con el objetivo de proteger los fines para los que han sido constituidas. Negarles la titularidad de este derecho conllevaría admitir la legitimidad constitucional de ciertas vulneraciones en el honor de las personas físicas, por el simple hecho de que los ataques no se dirijan directamente contra ellas, sino contra las organizaciones que ellas han creado.

### III

El quid de la cuestión a la hora de determinar si procede una indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de que una persona vea vulnerado su honor, se centra en el alcance de la presunción del artículo 9.3 de la LO 1/1982, mediante la cual se presumirá la existencia de un perjuicio siempre que se acredite la intromisión ilegítima. Tras analizar diversas opiniones de autores y varias sentencias, podemos llegar a la conclusión de que el alcance de dicha presunción debe ser absoluta respecto de los daños morales, *iuris et de iure*, por lo menos en el caso de las personas físicas. En mi humilde opinión, vulnerar el honor de una persona va íntimamente ligado con el padecimiento de un dolor psíquico o angustia, que, en los supuestos más graves, podrá desencadenar en enfermedades psíquicas. Por otro lado, también debemos concluir que los daños patrimoniales no disfrutarán de la suerte de dicha presunción, debiendo ser demostrados en todo caso mediante el método común de prueba.

### IV

Si bien hemos admitido que la presunción opera *iuris et de iure* respecto de los daños morales en las personas físicas, los supuestos en los que la víctima es una persona jurídica suscitan ciertas dudas. De todo lo expuesto en el trabajo sobre este asunto, ampliamente debatido por doctrina y jurisprudencia, podemos concluir que la presunción no debería ser absoluta para las personas jurídicas, pues se ha acreditado que pueden existir casos en los que no se genere ningún daño moral, o éste sea reparado de forma específica. En dichos casos, concebir la presunción como *iuris et de iure* supondría conceder indemnizaciones por daños morales cuando no existen, o cuando en realidad se trata de daños patrimoniales de lucro cesante de difícil prueba. Por ente, podemos concluir afirmando que, en el ámbito de las personas jurídicas, la presunción del artículo 9.3 de la LO 1/1982 debería regir *iuris tantum*, ofreciendo la posibilidad al demandado de probar la ausencia del perjuicio.

## V

En cuanto al conflicto existente entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión e información, a pesar de conformarse el primero como un límite de tales libertades, no nos cabe duda de que se deberán analizar las circunstancias de cada caso en concreto. Los tribunales deberán realizar una ponderación de ambos derechos siguiendo los criterios valorativos que señala la jurisprudencia en numerosas sentencias, centrándose en aspectos como la veracidad de la información difundida o la utilización de expresiones injuriosas innecesarias para expresar una opinión. También debemos señalar que en estos casos cobrará una especial importancia el aspecto subjetivo del conflicto, diferenciando entre si la información la publica un profesional de la comunicación o no, o si el sujeto que sufre la presunta intromisión en su honor es una personalidad pública.



## **BIBLIOGRAFÍA**

- ❖ ATIENZA NAVARRO, M<sup>a</sup>. L., “Indemnizaciones de daños y perjuicios e intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, *Revista bolivariana de derecho*, 2013.
- ❖ CARMONA SALGADO, C., *Calumnias, injurias y otros atentados contra el honor*, Tirant lo Blanch, Valencia 2012.
- ❖ CARRILLO, M., “Libertad de expresión y derecho de rectificación en la Constitución Española de 1978”, *Revista de Derecho Político*, 1986.
- ❖ DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., *Tratado de Responsabilidad Civil*, Civitas, Madrid 1993.
- ❖ DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, L, “Culpa y riesgo en la Responsabilidad Civil Extracontractual”, *AFDUAM*, 2000.
- ❖ ESCRIBANO TORTAJADA, P., “El derecho al honor y a la propia imagen en internet y las redes sociales: algunos problemas que se plantean en relación con la responsabilidad civil”, *Congreso Internacional de Derecho Civil*, Tirant lo Blanch, Salamanca 2018.
- ❖ GÓMEZ POMAR, F., “Daño moral”, *InDret*, 2000.
- ❖ GÓMEZ POMAR, F., “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1<sup>a</sup>, 20.2.2002: el daño moral de las personas jurídicas”, *InDret*, 2002.
- ❖ JUSTINIANO, Instituta, Libro I, 1, 3.

- ❖ LLAMAS POMBO, E, “Formas de reparar el daño”, *Sobre la responsabilidad civil y su valoración*, Sepin, Madrid 2009.
  
- ❖ MORENO MARÍN, M<sup>a</sup>. D., *El daño moral causado a las personas jurídicas*, Dykinson, Madrid 2019.
  
- ❖ NÚÑEZ MARTÍNEZ, M<sup>a</sup> A., “El Tribunal Constitucional y las libertades del artículo 20 de la Constitución Española” *Revista de Derecho UNED*, 2008.
  
- ❖ PADILLA RUIZ, P., “El conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2011.
  
- ❖ PARDO FALCON, J., “Los derechos del artículo 18 de la Constitución Española en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, 1992.
  
- ❖ PARRA MEMBRILLA, L., “Responsabilidad civil derivada de la vulneración de los derechos de la personalidad en la red”, *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, 2017.
  
- ❖ REGLERO CAMPOS, F, “El nexo causal. Las causas de exoneración de responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor. La concurrencia de culpas”, *Lecciones de Responsabilidad Civil*, Aranzadi, 2013.
  
- ❖ RODRÍGUEZ GUITIÁN, A. M<sup>a</sup>., “El derecho al honor de las personas jurídicas (Comentario a la STC 139/1995, de 26 de septiembre)”, *Anuario de Derecho Civil*, 1996.

- ❖ ROVIRA SUEIRO, M<sup>a</sup> E., *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*, A Coruña 1997.
  
- ❖ URIARTE VALIENTE, L. M<sup>a</sup>., “Algunos aspectos procesales de la tutela jurisdiccional civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (I)”, *Boletín del Ministerio de Justicia*, 2005.
  
- ❖ VICENTE DOMINGO, E, "El daño", *Lecciones de Responsabilidad Civil*, Aranzadi, 2013.
  
- ❖ VIDAL MARÍN, T., “Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional”, *InDret*, 2007.
  
- ❖ YZQUIERDO TOLSADA, M., “Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2017 (376/2017). Alcance del derecho de rectificación”, *BOE*, 2017.

## **LEGISLACIÓN UTILIZADA**

- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta.
- Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

## **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO**

- STS de 15 de junio de 2016.
- STS de 29 de febrero de 2012.
- STS de 3 de enero de 2014.
- STS de 16 de enero de 2010.
- STS de 19 de julio de 2006.
- STS de 27 de noviembre de 2008.
- STS de 21 de octubre de 2014.
- STS de 4 de julio de 2012.
- STS de 21 de mayo de 2009.
- STS de 23 de febrero de 1998.
- STS de 18 de febrero de 2015.
- STS de 2 de septiembre de 2015.
- STS de 16 de febrero de 2016.
- STS de 21 de diciembre de 2016.
- STS de 25 de noviembre de 2002.
- STS de 20 de febrero de 2002.
- STS de 14 de junio de 2017.
- STS de 4 de octubre de 2019.

## **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

- STC 139/1995, de 26 de septiembre.
- STC 107/1988, de 8 de junio.
- STC 64/1988, de 12 de abril.
- STC 91/1995, de 19 de junio.
- STC 344/2015, de 16 de junio.
- STC 594/2015, de 11 de noviembre.
- STC 79/2014, de 28 de mayo.
- STC 104/1986, de 17 de julio.
- STC 12/1982, de 31 de marzo.
- STC 105/1990, de 6 de junio.